



**UNIVERSIDAD
TORCUATO DI TELLA**

DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA Y ESTUDIOS INTERNACIONALES

Maestría en Ciencia Política

Políticas sociales y delito en América Latina

Autora: Guadalupe Peralta Agüero

Legajo: 14t152

Mentor: Germán Lodola

CABA, Febrero 2018

Abstract

¿Qué impacto tienen las políticas sociales sobre las tasas de delito? ¿Los países con gobiernos de izquierda tienen menores tasas de delito que los países con gobiernos de centro o derecha? El presente trabajo de investigación se propone esclarecer en qué medida las políticas sociales -destinadas a disminuir la desigualdad y la pobreza, y a cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos- contribuyen en la lucha contra el delito. Para ello se realiza un estudio comparativo de los países de América Latina en el período 2005-2014, y se presentan análisis de correlación y de causalidad con técnicas de investigación cuantitativas.

El indicador seleccionado para estudiar el delito es la tasa de homicidios cada 100,000 habitantes, mientras que los indicadores de políticas sociales seleccionados son el gasto social per cápita (en USD) y el porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años que no estudia ni trabaja (tomado como indicador de políticas sociales educativas). Asimismo, se incluye una variable dummy que representa si los países tuvieron gobiernos de izquierda o no durante el período estudiado, con el fin de determinar si los gobiernos de izquierda tienen menores tasas de delito.

El argumento de la presente tesis es que la implementación de políticas sociales debería disminuir las tasas de delito, ya que las mismas contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, particularmente aquellos con menores recursos, y es intuitivo pensar que esto podría reducir al menos el delito “por necesidad”. En este sentido, el Estado, al contribuir a garantizar las necesidades básicas de sus ciudadanos, debería también contribuir en la lucha contra el delito. A la vez se postula que así como en la década de los noventa las tasas de delito se dispararon debido a las transformaciones en la economía de mercado, los países que en la década siguiente adoptaron gobiernos de izquierda deberían mejorar sus índices de delito a través de la implementación de extensos programas de políticas sociales, debido a su efecto sobre la calidad de vida de los ciudadanos.

Contenido

I. Introducción	4
II. Revisión de la literatura	8
a. Determinantes del delito	8
b. Panorama de inseguridad en América Latina	14
III. Variable independiente, políticas sociales	19
a. Principales indicadores de las políticas sociales	21
IV. Argumento teórico e hipótesis	22
V. Metodología y medición de variables	25
VI. Resultados estadísticos	28
VII. Conclusiones	38
VIII. Referencias bibliográficas	40

I. Introducción

La inseguridad creciente en América Latina a partir de la década del noventa es un fenómeno extensamente estudiado. Sin embargo, a pesar de las distintas contribuciones de la literatura, al día de hoy todavía falta responder interrogantes respecto a los factores asociados a ella, a las acciones que podría tomar el Estado para reducirla, a las áreas de gestión responsables de dar una solución a esta problemática, al grado de efectividad de las medidas de gobierno, y al rol que le compete a la sociedad en este terreno. En efecto, los estudios de criminología y seguridad ciudadana distan de ofrecer explicaciones acabadas respecto al panorama de inseguridad que enfrenta la región en las últimas décadas. Más aún, son escasos los trabajos que estudian el impacto de políticas públicas y acciones gubernamentales en el delito, y que orientan a los gobernantes con recomendaciones de gestión.

En particular, si bien la literatura ha dado en reconocer que la pobreza y la desigualdad correlacionan altamente con las tasas de delito, se desconoce la naturaleza del delito en sociedades que cuentan con la implementación de políticas sociales frente a aquellas que han sido más reservadas en este plano. En este contexto, se plantea el siguiente interrogante: ¿qué impacto tienen las políticas sociales sobre las tasas de delito?

La expectativa teórica del presente estudio es que la implementación de políticas sociales disminuya las tasas de delito, ya que las mismas contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, particularmente aquellos con menores recursos, y es intuitivo pensar que esto podría reducir al menos el delito “por necesidad”. En este sentido, el Estado, al contribuir a garantizar las necesidades básicas de sus ciudadanos, debería también contribuir en la lucha contra el delito. Por otro lado, una de las principales áreas de la política social es la educación¹, que generalmente es reconocida como área de gobierno con capacidad de reducir

¹ Generalmente se define como áreas de la política social a los bienes universales de salud, educación y previsión social o pensiones jubilatorias, y a las llamadas transferencias monetarias condicionadas (TMC), que consisten en dinero en efectivo pensado para solventar los gastos mínimos de alimento, vestimenta y en algunos casos vivienda. De este modo, a través de las TMC el Estado responde a necesidades inmediatas, mientras que a

las tasas de delito. En efecto, diferentes estudios encuentran que a mayor nivel educativo menor propensión a delinquir; a la vez que definen a la escuela como una institución generadora de vínculos comunitarios y de contención que contribuye a alejar a los jóvenes del delito. Asimismo, la escuela además de enseñanza brinda ciertos servicios sociales, como alimento y actividades recreativas, y genera lazos de solidaridad y pertenencia entre sus miembros (CELIV 2014, 2015).

A partir de la década del noventa, luego de la implementación de políticas de libre mercado, América Latina se vio afectada por tasas de pobreza, desempleo y desigualdad sin precedentes. En este contexto, los registros empíricos dan cuenta de un aumento en las tasas de delitos producto del malestar social y económico de las sociedades de la región². Sin embargo, a principios de la década del 2000 los gobiernos latinoamericanos experimentaron el llamado “giro a la izquierda”, en el cual accedieron a la presidencia partidos o actores políticos que buscaban, como objetivo programático central, reducir las desigualdades sociales y económicas y ofrecer compensaciones a los grupos desfavorecidos por los cambios económicos de la década anterior (Levitsky y Roberts, 2011). A partir de este cambio político fundamental, muchos países de la región experimentaron mejoras en sus tasas de pobreza y desigualdad. Sin embargo, no hay registros respecto de cómo estos cambios políticos y de políticas públicas afectaron las tasas de delito en los países de la región.

El argumento que se desarrolla en esta tesis sugiere que así como en la década de los noventa las tasas de delito se dispararon debido a las transformaciones en la economía de

través de la provisión de bienes universales busca empoderar a sus ciudadanos para que a mediano/largo plazo puedan insertarse al mercado laboral y valerse por sí mismos.

² Respecto a este punto, Portes y Roberts (2005) sostienen que las políticas pro mercado implementadas en la década del 90' en América Latina generaron “condiciones para que aumenten los delitos en contra de la propiedad en la medida en que las clases subordinadas asumen por propia cuenta la resolución de sus carencias, absolutas y relativas”. En dicho estudio realizado para seis países de América Latina, se encuentra evidencia de un significativo incremento en el delito, la victimización y la inseguridad ciudadana. Por su parte, Wormald, Sabatini et al. (2003) advierten que “el asilamiento de los pobres, y la segmentación de las oportunidades sociales refuerza, entre la población marginal, problemas como violencia familiar, abandono escolar, vagancia y drogadicción, lo que precipita, especialmente entre la juventud, la adopción de patrones delincuenciales.”

mercado, los países que en la década siguiente adhirieron a los cambios hacia gobiernos de izquierda deberían mejorar sus índices de delito a través de la implementación de extensos programas de políticas sociales, debido a su efecto sobre la calidad de vida de los ciudadanos mencionado anteriormente.

En la literatura de seguridad es ampliamente reconocido que el delito representa un fenómeno multidimensional, que debe ser abordado desde distintas áreas de gobierno, no solo el área de seguridad, por lo que la implementación de políticas públicas -políticas educativas, sanitarias, previsionales y programas de inclusión social y transferencias monetarias condicionadas (TMC) -deberían impactar positivamente en la disminución de las tasas de delitos. A su vez, el delito no tiene el mismo impacto en todos los estratos de la sociedad, sino que los afecta heterogéneamente. En efecto, el delito y sus costos impactan con mayor fuerza sobre los grupos más vulnerables (Mesquita Neto, 2003). Por ello, se espera que las políticas sociales, dirigidas a mejorar la distribución del ingreso y a generar mayor equidad e inclusión de los grupos desfavorecidos, contribuyan en la lucha contra el delito.

En este sentido, y aportando sustento para la presente tesis, el informe de Seguridad Ciudadana del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2013- 2014 sostiene que la experiencia demuestra que las intervenciones en materia de seguridad ciudadana deben ser multisectoriales y atender tanto las necesidades de corto plazo como las vulnerabilidades estructurales que están detrás del delito y la violencia. A su vez, este informe propone como recomendación para lograr una América Latina segura “generar políticas públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas por la violencia y el delito”. Tal como se mencionó anteriormente, el delito impacta desproporcionadamente sobre los estratos más bajos de la sociedad, por lo la implementación de políticas destinadas a mejorar las condiciones de vida de estos sectores deberían impactar positivamente sobre la disminución del delito.

El presente estudio pretende dilucidar el efecto de las políticas sociales sobre la tasa de homicidio en los países de América Latina en el período 2005-2014, a través de técnicas

cuantitativas de análisis de investigación con un modelo de regiones de datos de panel. La pretensión del análisis es tanto producir una contribución a la literatura de delito y políticas sociales, como determinar si la implementación de políticas sociales tiene efectos positivos en el combate contra el delito, y a partir de allí ofrecer recomendaciones para orientar los planes de acción en temas de seguridad de los encargados de elaborar políticas públicas en los países de la región. En este punto, se pretende esclarecer los efectos de la acción del Estado, y más concretamente los efectos secundarios o poco explorados de las políticas sociales sobre el fenómeno de las tasas de delito en ascenso.

Como resultado este estudio se encuentra evidencia significativa estadísticamente respecto a que los países de América Latina que adhirieron al “giro a la izquierda” lograron reducir más la tasa de homicidios que los que no lo hicieron. Asimismo, que la disminución en el porcentaje de jóvenes que no estudia ni trabaja y el aumento en el PBI per cápita disminuye la tasa de homicidios.

Esta tesis se organiza del siguiente modo: en el capítulo II se presenta una revisión de las principales literaturas que estudian el tema del delito. En el capítulo III se presenta la variable independiente, políticas sociales. En el capítulo IV se presenta la hipótesis y el argumento teórico de la tesis. En el capítulo V se especifica la metodología de análisis utilizada, técnicas cuantitativas con modelo de datos de panel, la medición de las variables de estudio y las fuentes a las que se recurrió para obtener los datos. En el capítulo VI se presentan los resultados estadísticos, a partir de estadística descriptiva y de regresiones. Por último, el capítulo VII esboza las principales conclusiones del análisis y ofrece recomendaciones para futuras investigaciones.

II. Revisión de la literatura

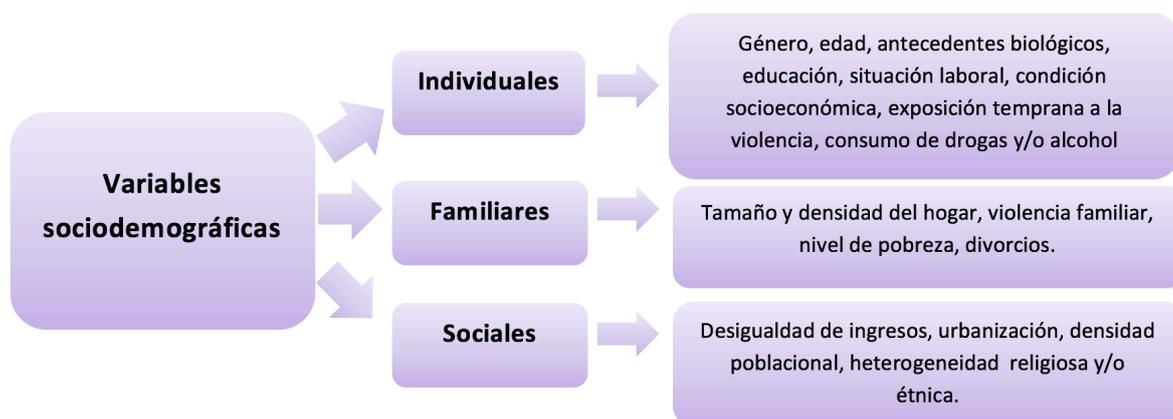
En el siguiente capítulo se presenta la literatura que estudia el delito. En este apartado, se exponen los determinantes del delito y los datos del panorama de inseguridad en América Latina.

a. Determinantes del delito

Dentro de la literatura que estudia los determinantes del delito se puede distinguir tres corrientes teóricas, de acuerdo al tipo de variables independientes que se consideran relevantes. La primera corriente estudia el efecto de variables socioeconómicas y demográficas; la segunda se concentra en variables institucionales y gubernamentales; mientras que la tercera considera el efecto de variables organizacionales.

La primera corriente puede, a su vez, clasificarse de acuerdo a las siguientes dimensiones de análisis de las variables sociodemográficas: individual, familiar y social.

Gráfico 1. Clasificación de variables sociodemográficas que explican el delito



Fuente: elaboración propia en base a la clasificación de Carrión (2002)

Dentro de las **variables individuales** se le asigna relevancia al efecto de la edad y el género. Distintos estudios encuentran que los hombres jóvenes – particularmente entre 15 y 29 años de edad- son más propensos que otros grupos de edad y que las mujeres a estar involucrados en actividades violentas y delictivas. Aaltonen et al. (2011), por ejemplo, encuentra que los homicidios son más frecuentemente perpetrados por hombres; mientras que Blumstein y Rosenfel (1998) encuentran que los jóvenes cometen más homicidios que los mayores.

Por otro lado, varios estudios encuentran que los bajos niveles de educación afectan los indicadores de desempleo y pobreza, que a su vez correlacionan con mayores tasas de delito, por lo que se espera que en sectores con menor nivel educativo la criminalidad aumente. (CELIV, 2014, 2015).

Por su parte, el status socioeconómico también reviste interés empírico, en cuanto que se entiende que frecuentemente los estratos más bajos de la sociedad tienden a estar más asociados con el delito (Aaltonen et al., 2011; CELIV, 2014, 2015). Sin embargo, es apropiado tomar estos hallazgos con precaución, evitando estigmatizar a los sectores más vulnerables de la sociedad. En efecto, los estudios de cárceles observan que la gran mayoría de presos pertenecen a los grupos socioeconómicos más desfavorecidos; pero muchos de ellos se apresuran a destacar que esto se debe a que los pobres ocupan las posiciones más vulnerables dentro de las grandes organizaciones criminales, y por ello tienden a ser los que la policía atrapa, y tienen menos recursos para enfrentar a la justicia (desconocen el funcionamiento del sistema judicial, no cuentan con el dinero necesario para pagar un abogado, o incluso pagar coimas para evitar la justicia), cosas que no suceden con los sectores socioeconómicos más altos. De este modo, se entiende que en América Latina el delito no es un fenómeno propio de los pobres, sino que los ricos muy comúnmente pueden evadir el peso de la ley (CELIV, 2015).

Sin embargo, cabe destacar que durante décadas se intentó determinar el efecto de estas variables socioeconómicas sobre la criminalidad, llegando a resultados contradictorios, muchas veces parciales e incluso contra intuitivos. Estas divergencias se deben principalmente a las diferentes formas en que estos autores conceptualizan y miden las variables socioeconómicas. A su vez, los hallazgos muchas veces carecen de validez externa, ya que se limitan a las regiones sobre las que se realizan los estudios, y frecuentemente se postula que no es pertinente realizar generalizaciones hacia todos los países, ya que estas variables dependen del contexto. Estas teorías entienden que el crimen se produce cuando existen factores estructurales que impiden que los ciudadanos alcancen sus expectativas económicas. En este sentido, el crimen es una reacción a un estímulo negativo, que generalmente es económico, pero también puede traducirse en discriminación, aislamiento o indiferencia social (Land et al. 1995).

La falta de empleo, la precariedad y la informalidad laboral están asociadas a mayores niveles de violencia y delincuencia. Esto se debe principalmente a que la falta de empleo y la precariedad laboral conducen a la necesidad de generar ingresos para el hogar y recurrir a actividades delictivas para ello, más frecuentemente robo, venta de drogas y secuestro (CELIV, 2014, 2015). Cohen (1985) encuentran que el nivel de desempleo está asociado con menores tasas de homicidio, y que la variación anual en la tasa de desempleo es lo que genera mayor delito.

El consumo de drogas y/o alcohol, por su parte, está asociado con mayores tasas de delito y con mayor violencia en la comisión del delito. Generalmente las encuestas a presos en cárceles de América Latina encuentran que la mayoría de los presos había abusado de alguna de estas sustancias antes de cometer el delito por el que está preso (CELIV, 2014, 2015).

Por último, la tenencia de armas tiende a aumentar la violencia y el delito en la sociedad (Duggan, 200; Blumstein y Rosenfel, 1998; CELIV, 2014, 2015).

Por su parte, dentro de las **variables familiares**, la literatura estudia variables como la tasa de divorcios, que está correlacionada con mayores tasas de criminalidad, puesto que el divorcio representa una situación de conflictividad intrafamiliar, que en América Latina muchas veces está acompañada de violencia doméstica o crímenes pasionales. Messner et al. (2004) encuentran evidencia que sostiene que el aumento en la tasa de divorcios aumenta el homicidio.

Por último, dentro de las **variables sociales** encontramos variables como la urbanización. Hay quienes sostienen que la urbanización está asociada con altas tasas de desempleo y pobreza, debido a la competencia que se genera entre muchos habitantes por ocupar un número limitado de puestos de trabajo, sumado a que estos contextos generan una situación de anonimato entre los ciudadanos, que se favorece el aumento de la delincuencia (Carrión, 2002). Sin embargo, la literatura no ha alcanzado un consenso respecto al efecto de la urbanización en el delito.

Por otro lado, se espera que mayor nivel de pobreza aumente el delito en una sociedad, puesto que los grupos sociales perjudicados podrían recurrir a la criminalidad “por necesidad”. Bailey (1984) encuentra evidencia para el efecto esperado, refutando a Messner (1982), quien encontraba la relación contraria. Luego, Messner et al. (2004) confirman el efecto positivo de la pobreza sobre el delito de homicidio. Por otro lado, Kelly (2000) encuentra evidencia empírica de que la pobreza tiene fuertes efectos positivos sobre crímenes a la propiedad, pero casi ninguno en el homicidio. En sintonía con el argumento de la presente tesis, Camara y Salama (2004) advierten que si bien la pobreza está asociada con mayor índices de delito, los pobres no son “por naturaleza” una clase peligrosa y violenta, pero las políticas económicas de exclusión pueden volverla peligrosa. En este contexto, las políticas de gasto social dirigidas a educación, salud, y subsidios “lejos de favorecer el “parasitismo” o la “holgazanería”, o entorpecer el funcionamiento del mercado impidiéndole alcanzar el

equilibrio, favorecería la movilidad social y sería un factor de integración que podría establecer nuevos códigos de valor que frenen el desencadenamiento de la violencia” (179).

Asimismo, frecuentemente en la literatura de delito se menciona que la desigualdad en el ingreso significa una privación de bienes relativa que aumenta la criminalidad, debido al surgimiento de sensación de desventaja o resentimiento en los grupos más desfavorecidos. (Bailey, 1984). Savolainen (2000), por su parte, advierte que el efecto positivo de la desigualdad en el ingreso sobre la tasa de homicidios se limita a las naciones caracterizadas por instituciones débiles de protección social; y Kelly (2000) encuentra que el efecto de la desigualdad en el delito depende de la naturaleza del delito. En particular, que la desigualdad no tiene efectos en crímenes a la propiedad, pero sí tiene un fuerte efecto positivo y significativo en el homicidio.

También se tiene en cuenta el efecto de la heterogeneidad religiosa y etnolingüística, ya que se considera que la heterogeneidad en la sociedad genera un mayor nivel de conflicto, por lo que se espera que en sociedades heterogéneas el crimen sea mayor. La literatura que estudia los clivajes sociales y el origen de las guerras civiles considera a la heterogeneidad religiosa y etnolingüística como un determinante clave del conflicto (Blumstein y Rosenfel, 1998).

Por último, la literatura se encuentra dividida respecto al efecto esperado del crecimiento sobre el delito. Neumayer (2010) encuentra que el crecimiento económico y el crecimiento en el ingreso disminuyen las tasas de homicidios.

Una segunda corriente tiene en cuenta **variables institucionales**, en particular, de burocracias eficientes o calidad de gobierno. Estas teorías, aunque son muy escasas, sostiene que la existencia de mecanismos institucionales eficientes de gobierno ayuda a prevenir crímenes y a enjuiciarlos cuando ocurren. Se espera que la calidad de las instituciones de gobierno afecten las tasas de delincuencia, y se utilizan indicadores tales como el

cumplimiento de las leyes, la estabilidad política y el control de la corrupción. Para medirlos generalmente se utiliza el Índice de Gobernanza Mundial del Banco Mundial.

Por ejemplo, se espera que un sistema judicial eficiente (que incluye enjuiciamiento efectivo y castigo) genere un efecto de disuasión y contribuya a menores tasas de criminalidad en general. Asimismo, un sistema judicial eficiente provee una alternativa a la violencia para la resolución de conflictos interpersonales. LaFree (2005) citando a Johnson y Monkkonen (1996) postula que “a medida que las disputas comenzaron a resolverse cada vez más en las cortes antes que en las esquinas de las calles o en bares las tasas de crímenes violentos disminuyeron”. Dentro de esta perspectiva, Julio H. Cole y Andrés Marroquín Gramajo (2009) encuentran en efecto negativo en la calidad de las instituciones gubernamentales sobre las tasas de homicidio. Asimismo, dentro de esta segunda perspectiva se inscriben estudios que consideran el efecto de las leyes y regulaciones respecto a la posesión de armas y el consumo de drogas y alcohol.

Por otro lado, emerge una tercera perspectiva que analiza el efecto de los **mecanismos de organización social** y los vínculos comunitarios en el crimen. Browning et al (2004) encuentran una situación paradójica en las formas de organización social. Estudios previos, postulan que la des urbanización está asociada con altas tasas de criminología. En este contexto, Browning et at (2004) buscan explicar por qué algunos barrios socialmente organizados tienen tasas de crímenes altas. A partir de allí, advierten que los efectos regulatorios de la eficacia colectiva sobre la violencia son reducidos en barrios y comunidades caracterizados por densas redes de interacción social e intercambio recíproco. En concreto, Browning et al (2004) argumentan que las redes sociales densas y los intercambios interpersonales generalizados promueven la eficacia colectiva, la confianza o la solidaridad entre los residentes de una comunidad, a la vez que la existencia de mecanismos de control social informales. Sin embargo, gran parte de los crímenes que se cometen en una comunidad son perpetrados por jóvenes o vagabundos que quedan excluidos de estos intercambios

organizativos. A su vez, los miembros activos de la sociedad que buscan delinquir cuentan con información interna de los mecanismos de control informal y pueden actuar desde dentro de la organización para evitar que el control sea efectivo, facilitando la comisión de delitos (Browning, 2004). Por su parte, Messner et al. (2004) miden el efecto de la confianza social y del activismo social, encontrando una relación negativa en el primer caso (a mayor confianza social menor tasa de homicidios) y una relación positiva en el segundo caso (a mayor activismo social mayor tasa de homicidios).

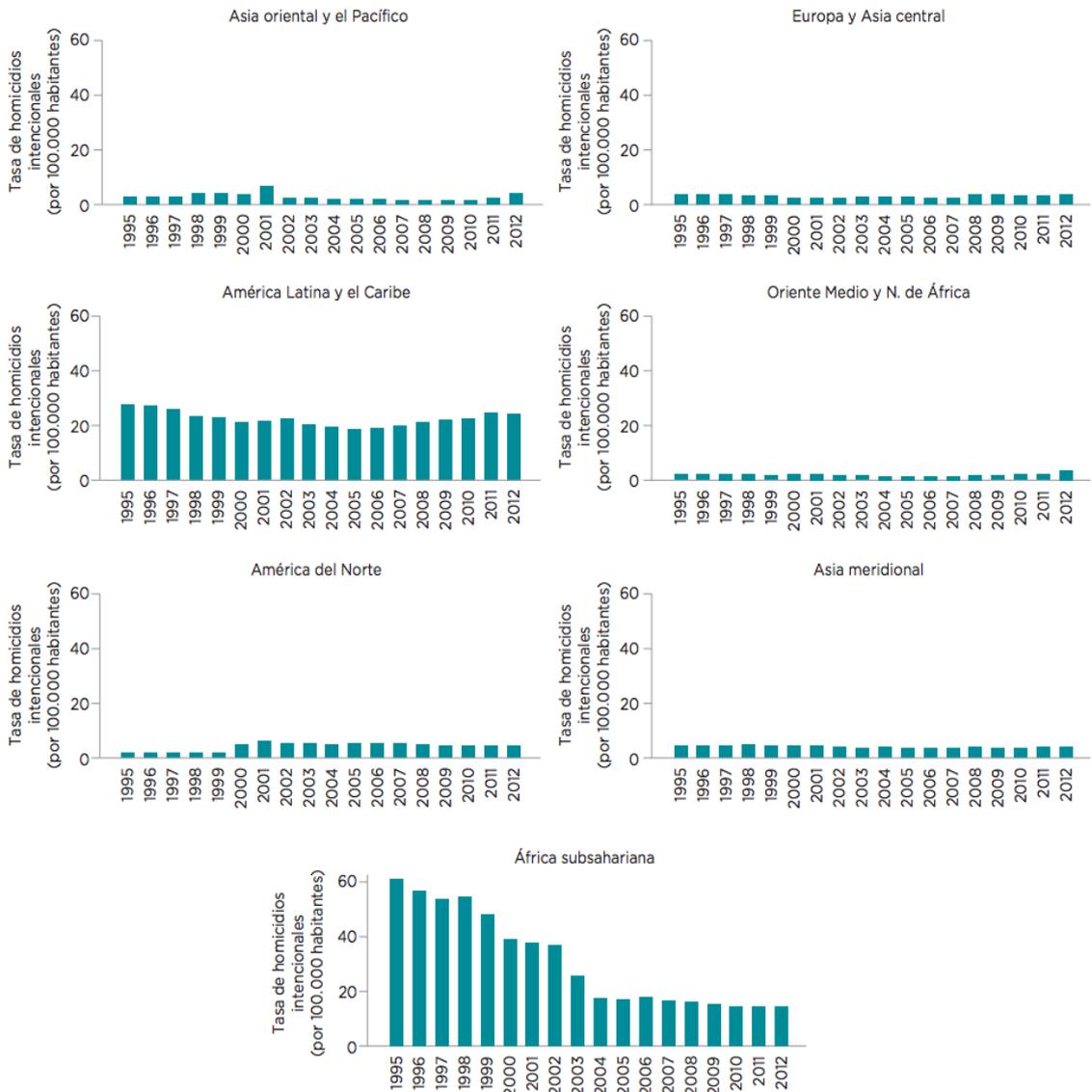
b. Panorama de inseguridad en América Latina

La seguridad constituye un problema de primer orden en América Latina, tanto para sus ciudadanos como para sus gobernantes. A su vez, esta problemática creciente demanda cada vez más por respuestas por parte de especialistas y académicos. En efecto, América Latina es la región más violenta del mundo. En ella habita el 9% de la población mundial, pero se registra el 33% de los homicidios de todo el mundo (BID, 2015). Más aún, la tasa de homicidios de la región es dos veces el promedio mundial, y se registran más de 100,000 homicidios por año (PNUD, 2013). En segundo lugar se encuentra África, que registra el 31% de los homicidios del mundo. En tercer lugar se ubica Asia con el 28% de los homicidios, seguida por Europa con un 5% y América del Norte con 3%. Oceanía representa menos del 0,3%. (BID, 2015).

En el siguiente gráfico podemos observar que mientras en África la tendencia del homicidio se encuentra en descenso desde 1995, en América Latina, si bien tuvo una leve caída desde 1995 hasta el 2005, se encuentra en aumento desde ese año. En efecto, muchos países de la región tienen tasas de homicidios con niveles de epidemia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud., y estos niveles de inseguridad impiden el desarrollo de la región (PNUD, 2015).

Gráfico 2. Tasa de homicidios cada 100.000 habitantes por país. 1995-2012. Comparación por regiones.

GRÁFICO 1.1 Tasas de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, 1995-2012

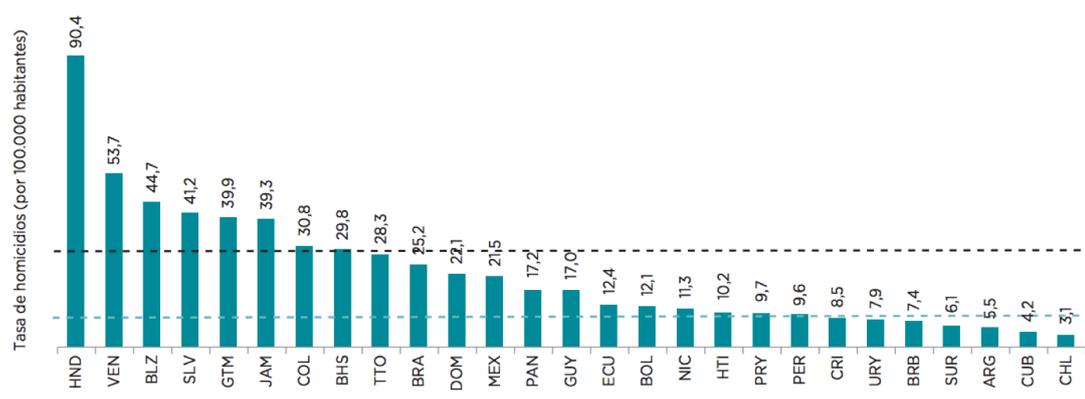


Fuente: Cálculos del autor basados en datos de UNODC (2015).

Fuente: PNUD, 2015

Cabe destacar que en materia de seguridad (como en muchas otras áreas de interés) la disparidad entre los países de América Latina es muy amplia. En efecto, el rango de variación en las tasas de homicidio en los países de la región va de 90.4, siendo Honduras el país más violento, hasta 3.1, siendo Chile el país con menor tasa de homicidio. Argentina, por su parte, se encuentra en tercer lugar de los países con menor tasa de homicidio de la región.

Gráfico 3. Tasas de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes por país, 2012 o último año disponible. América Latina



Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (2015).

Nota: La línea celeste indica un nivel epidémico de violencia; la línea negra indica un nivel de violencia de conflicto civil.

Códigos de países: HND (Honduras), VEN (Venezuela), BLZ (Belice), SLV (El Salvador), GTM (Guatemala), JAM (Jamaica), COL (Colombia), BHS (Bahamas), TTO (Trinidad y Tobago), BRA (Brasil), DOM (República Dominicana), MEX (México), PAN (Panamá), GUY (Guyana), ECU (Ecuador), BOL (Bolivia), NIC (Nicaragua), HTI (Haití), PRY (Paraguay), PER (Perú), CRI (Costa Rica), URY (Uruguay), BRB (Barbados), SUR (Suriname), ARG (Argentina), CUB (Cuba), CHL (Chile).

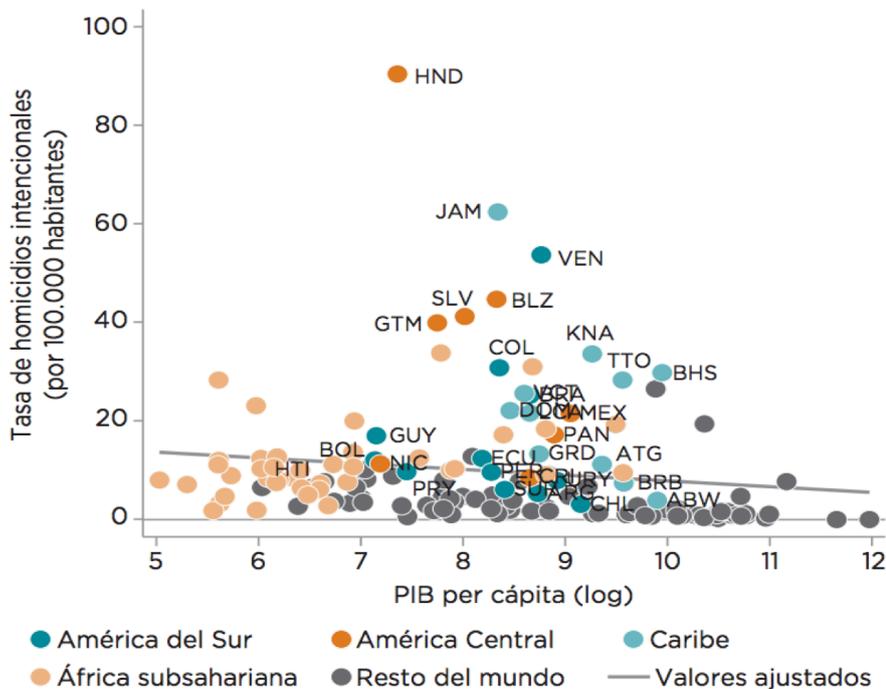
Fuente: PNUD (2015) en base a datos del Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (2015).

La literatura que estudia el delito suele aceptar que cuantos más altos son los ingresos de un país, menor será el nivel de violencia de su sociedad. Sin embargo, al analizar lo que ocurre en América Latina, observamos que la región es una excepción a la regla, puesto que

los niveles de violencia y criminalidad no se corresponden con sus niveles de ingresos, aun cuando se controla por niveles de pobreza y desigualdad.

En el siguiente gráfico la línea recta representa la correlación entre la tasa de homicidio y el PIB. La tendencia mundial muestra que a medida que aumenta el PIB desciende la tasa de homicidios; sin embargo, Honduras, Jamaica, Venezuela, El Salvador y Guatemala son los principales *outliers* en esta correlación, ya que a pesar de que su PIB per cápita es mayor al promedio mundial, tienen las mayores tasas de homicidios del mundo.

Gráfico 4. Tasas de homicidio y PIB per cápita, 2012 o último año disponible



Fuente: Cálculos del autor basados en datos de UNODC (2015).

Fuente: UNODC 2015.

En efecto, América Latina cuenta hoy con economías crecientes, menores índices de pobreza y democracias más consolidadas. Sin embargo, estas mejoras no parecen afectar considerablemente los niveles de violencia y delito de la región. Más aún, “en la última década la región ha sufrido una epidemia de violencia, acompañada por el crecimiento y difusión de los delitos, así como por el aumento del temor entre los ciudadanos” (PNUD, 2013).

De acuerdo al informe de Seguridad Ciudadana con Rostro Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2013) “entre 2000 y 2010 la tasa de homicidios de la región creció 11%, mientras que en la mayoría de las regiones del mundo descendió o se estabilizó. En una década han muerto más de 1 millón de personas en Latinoamérica y el Caribe por causa de la violencia criminal. Por otra parte, los robos se han casi triplicado en los últimos 25 años. Y en América Latina 460 personas sufren las consecuencias de la violencia sexual al día; la mayoría son mujeres”.

Sin embargo, los niveles de inseguridad no son homogéneos en la región, sino que en algunos países el principal problema es el homicidio mientras que en otros es la victimización, es decir el perjuicio contra bienes patrimoniales, que aumentan la percepción de inseguridad de los ciudadanos. A su vez, la heterogeneidad en el tipo e intensidad del delito persiste al interior de los países (PNUD, 2013).

Frente a este contexto, el PNUD (2013) manifiesta que “los estados de la región muestran grandes déficits de capacidades en materia de justicia y seguridad; esto se refleja en índices de impunidad alarmantes, la crisis que atraviesan sus sistemas carcelarios y en la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones de justicia y policía”. A su vez, cinco de cada diez latinoamericanos perciben que la seguridad en su país se ha deteriorado: hasta un 65% han dejado de salir de noche por la inseguridad y 13% reportó haber sentido la necesidad de cambiar su residencia por temor a ser víctima del delito (LAPOP-PNUD 2012). Tomando como base la población total de América Latina, este 13% equivaldría a 74.8 millones de personas, aproximadamente; es decir, todos los habitantes de Argentina, más los de Perú y

Uruguay (PNUD, 2013). A este panorama se suma el aumento del delito organizado, tal como el secuestro o la extorsión, y los delitos como la violencia de género, el delito callejero, la corrupción, y la violencia estatal por parte de agentes de seguridad.

Tal como se observó al inicio de esta investigación, lo más preocupante del panorama de inseguridad de la región es que la tendencia en aumento en el delito en América Latina no estuvo acompañado por una mayor inversión de los gobiernos para analizar la efectividad de las políticas públicas en la reducción del crimen, ni para obtener mayores datos del fenómeno de la inseguridad en la región (Di Tella, Galiani y Schargrotsky, 2010). Por ello es menester que tanto desde el ámbito público como académico se produzcan hallazgos que contribuyan a esclarecer los efectos de las políticas públicas sobre el delito en América Latina.

III. Variable independiente, políticas sociales

Martínez y Collinao (2010) entienden por políticas sociales al “conjunto de actividades relacionadas con el diseño e implementación de estrategias orientadas a mejorar la calidad de vida de la población de un país, región o localidad. Considera, por tanto, una amplia variedad de sectores, los más comúnmente reconocidos son salud, educación, trabajo y seguridad social. Sin embargo, también suelen incluirse en dicho marco a sectores infraestructura física, pero que tienen objetivos directamente asociados a los de la política social, como es el caso de la vivienda, agua potable y alcantarillado, transporte y comunicaciones”. Así, en ésta “se incluyen todas aquellas intervenciones que tienen como objetivo último solucionar o minimizar los efectos de los problemas sociales, sean estos una carencia o restricción para el desarrollo de las capacidades individuales, una situación de conflicto entre distintos grupos o la conculcación de uno o más derechos”. A su vez, dentro de la política social se incluyen las transferencias monetarias tendientes a mejorar los índices de desigualdad y pobreza³.

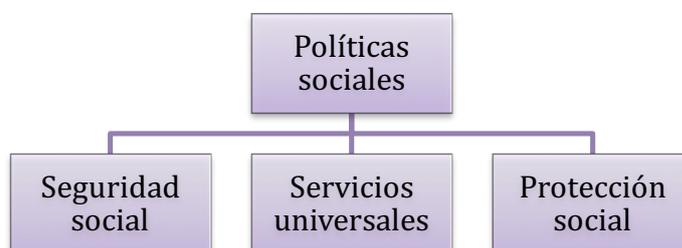
³ A partir de la década del 2000 se volvieron más frecuentes en los países de la región las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), que consisten en transferencias de dinero por parte del Estado a los

Repetto (2001), por su parte advierte que las políticas sociales pueden considerarse como un subconjunto de las políticas públicas, entendidas estas como la decisión y acción de una instancia estatal ante un tema que forma parte de la agenda gubernamental. El concepto de política social no tiene un límite preciso, en general se utiliza para hacer referencia a aquellas acciones que tienen un impacto directo en el bienestar de los ciudadanos a través de proporcionarles a estos servicios e ingresos (p. 20).

Por su parte, por gestión de la política social se entiende al manejo de ésta, que se realiza a través de planes, programas, proyectos y normas, con fines a mejorar la calidad de vida de las personas. De esta manera, “el logro de dichos objetivos refleja los impactos que se alcanzan con la gestión, los que tienen como contrapartida la necesidad de inyección de recursos físicos, humanos y financieros para su implementación, y que a nivel agregado conforman lo que se conoce como el gasto o inversión social” (CEPAL, 2013). De acuerdo a Martínez y Collinao (2010), el gasto social se refiere al monto de recursos destinados al financiamiento de los planes, programas y proyectos cuyo objetivo es generar un impacto positivo en algún problema social, independientemente de la entidad administrativa y el sector que realiza cada función, de la fuente de financiamiento y de la partida de costos a que se destinan (CEPAL, 2013).

Dentro de la política social puede identificarse tres grandes áreas: seguridad social, los servicios públicos de cobertura universal de bienes y la protección social.

Gráfico 5. Las áreas de la política social



sectores más vulnerables de la sociedad, cuyo envío depende del cumplimiento de ciertos criterios en educación y salud, tales como que los hijos asistan a clase y presentación el carnet de vacunación al día.

Fuente: elaboración propia

Las políticas de seguridad social están enfocadas en proteger a los trabajadores del sector formal de la economía, y son financiados por los trabajadores, los empleadores y el Estado. Dentro de estos beneficios se encuentran las jubilaciones y pensiones, los seguros de desempleo y los seguros de riesgos a la salud en el lugar de trabajo.

Dentro de los servicios universales se encuentran las áreas de educación y salud.

Por último, las políticas de protección social hacen referencia principalmente a las transferencias monetarias, que generalmente tienen como objetivo satisfacer las necesidades vitales de los ciudadanos con menores recursos.

a. Principales indicadores de las políticas sociales

El Estado, a través de distintas organizaciones, tanto públicas como privadas, es el responsable de proveer las políticas sociales públicas de un país.

Para analizar los efectos de las políticas sociales hay tres conjuntos de indicadores relevantes (CEPAL, 2011):

1. Indicadores de ejecución física: Procesos/Operación. Por ejemplo: cobertura, número de atenciones/productos/servicios entregados, cantidad de beneficiarios (total y por características de la población), focalización (grado, eficacia y eficiencia).
2. Indicadores de ejecución financiera- gasto: Por ejemplo: volumen, tipo de gasto (corriente- inversión), distribución del gasto por agentes de financiamiento y ejecución, participación del gasto público/privado en cada objetivo, etc.
3. Indicadores de efectividad en el logro de objetivos- Impacto/Efectividad: Por ejemplo, nivel y variaciones en: pobreza (porcentaje de la población que vive con menos de \$1 USD, que vive bajo la línea nacional de extrema pobreza), desigualdad, salud, (mortalidad infantil, tasas de natalidad, prevalencia de la

desnutrición, anemia, bajo peso al nacer), educación (nivel educacional, tasas de aprobación, reprobación, deserción, etc.).

En la presente tesis se utilizará un indicador de ejecución financiera-gasto para medir el impacto de las políticas sociales sobre los índices de delito en los países de América Latina, a saber, el gasto en políticas sociales per cápita. Asimismo, se incluye un indicador de efectividad de las políticas sociales educativas, el porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años que no estudia ni trabaja (NINI).

IV. Argumento teórico e hipótesis

El supuesto de que las sociedades más pobres son también las más inseguras, o dicho de otro modo, que la pobreza causa delito, y por lo tanto que los pobres están más frecuentemente involucrados en actividades delictivas que los ricos, es una de las teorías de causalidad del delito más antiguas. Luego empezó a pensarse que no es la pobreza en términos absolutos sino la pobreza relativa, es decir, la desigualdad en la distribución del ingreso, lo que causa mayor delito. En efecto, la literatura ha llegado a cierto consenso respecto a que de uno u otro modo los factores socioeconómicos están fuertemente correlacionados con la actividad delictiva.

En la década del noventa los gobiernos de América Latina implementaron un paquete de políticas de libre mercado, luego del Consenso de Washington y bajo recomendación de organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial, que como efecto secundario incrementaron la pobreza y la desigualdad. En este contexto, el delito en la región alcanzó picos desconocidos hasta el momento, ya sea por la necesidad de subsistencia de los estratos más vulnerables de la sociedad que recurrieron al delito; por el sentimiento de frustración que la desigualdad en la distribución del ingreso puede haber generado en quienes no tienen las mismas oportunidades que los más ricos; porque la reducción de la presencia estatal en la vida

social favoreció la formación de bandas delictivas; y/o por otras explicaciones que la academia y los organismos internacionales se han esforzado en esbozar. En efecto, en las últimas dos décadas las ciencias sociales han estudiado largamente los efectos tanto positivos como negativos de las reformas neoliberales en la región de América Latina, contando al aumento en las tasas delictivas como una de las principales consecuencias adversas y no queridas.

Sin embargo, al día de hoy no se conocen estudios que se propongan indagar en qué medida el cambio de políticas que se llevó a cabo en la década siguiente a las reformas de mercado en algunos países de América Latina afectó las tasas de delitos. A principios de la década del dos mil los ciudadanos de distintos países de la región prefirieron optar por gobiernos de izquierda antes que continuar con gobiernos conservadores. Cabe destacar que este cambio en las preferencias de los votantes se debió más bien al fracaso económico y social de los gobiernos anteriores y a la necesidad de optar por nuevas alternativas⁴ antes que a un cambio de ideología hacia a la izquierda (Queirolo, 2013).

En este período, los partidos de izquierda se definen en función de la presencia de actores políticos que buscan, como objetivo programático central, reducir las desigualdades sociales y económicas de los ciudadanos más perjudicados por las reformas implementadas en la década anterior (Levitsky y Roberts, 2011). Estos partidos latinoamericanos de izquierda usaron los recursos y la autoridad pública para redistribuir el bienestar y los ingresos a los grupos con menores ingresos, eliminar jerarquías sociales y fortalecer a los grupos excluidos o desfavorecidos tanto por el sistema político como por el mercado. Desde la perspectiva socioeconómica, la izquierda se propuso combatir las desigualdades producidas por la competencia en el mercado y la pobreza estructural, ofrecer mayores oportunidades a los pobres y proveer protección frente a las inseguridades del mercado. En la arena política, los

⁴ Queirolo (2013) advierte que en la literatura también es conocida la hipótesis de que el cambio en las preferencias de los votantes hacia gobiernos de izquierda se utilizó a modo de castigo a los gobiernos anteriores.

gobiernos de izquierda pretendieron incrementar la participación de los grupos marginados y eliminar las jerarquías que desfavorecen a los sectores populares (Levitsky y Roberts, 2011). Los países de América Latina que adhirieron al giro a la izquierda son Argentina, Bolivia, Brasil Chile, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela.

En este contexto, la primera hipótesis del presente estudio puede resumirse del siguiente modo:

H1: La implementación de políticas sociales reduce las tasas de homicidio.

El argumento que sustenta esta hipótesis consiste en que las políticas sociales están dirigidas a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos a través de la acción en las áreas de educación, salud, previsión social y consumo (a través de transferencias monetarias) y a proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad frente a la vicisitudes del mercado económico, lo que debería reducir los incentivos o las causas de la criminalidad.

La segunda hipótesis de esta tesis se enuncia del siguiente modo:

H2: Los países de América Latina que en la década 2005-2014 tuvieron gobiernos de izquierda tuvieron menores tasas de homicidio que los países de América Latina que no lo hicieron.

Esta hipótesis es en cierto modo una continuación de la anterior, en tanto que el argumento que aquí se expone sugiere que así como en la década de los noventa las tasas de delito aumentaron en América Latina debido a las transformaciones en la economía de mercado, los países de la región que en la década siguiente adhirieron a los cambios hacia gobiernos de izquierda deberían mejorar sus índices de delito a través de la implementación de extensos programas de políticas sociales. En efecto, como se mencionó anteriormente, es de esperar que la implementación de programas de políticas sociales tenga un efecto positivo en la disminución del delito, ya que estas políticas tienen como objetivo central contribuir a

reducir la pobreza y la desigualdad, y garantizar a los ciudadanos la satisfacción de sus necesidades básicas. De este modo, se espera que al menos el delito “por necesidad” disminuya, contribuyendo a reducir la inseguridad y violencia en las sociedades en cuestión

V. Metodología y medición de variables

Con el fin de testear las hipótesis planteadas se toma como unidad de análisis a los países de América Latina en el período 2005-2014, y se realizan tanto análisis descriptivos como inferenciales.

La variable dependiente de estudio es **la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes**. Se seleccionó este indicador en base al acuerdo internacional de que la tasa de homicidios es un buen indicador del nivel de delito y violencia de las sociedades, y a la vez es considerado el indicador más preciso y cercano a la realidad en materia de seguridad. En efecto, la principal complejidad al estudiar el delito es estimar el nivel de sub reporte que existe, ya que generalmente un alto porcentaje de víctimas no se atreven a denunciar el delito por miedo a la policía, por desconfianza de que vaya a tener alguna resolución, e incluso por desconocimiento de la importancia de su denuncia. Sin embargo, en el caso del delito de homicidio se trata de una cifra más confiable y exacta, ya que existe un número objetivo de personas fallecidas por homicidio que la Justicia y los Centros de Salud pueden contabilizar.

Para medir el efecto de las políticas sociales sobre el delito, se toma como variable independiente al **gasto social per cápita** (medido en USD), como indicador de las políticas sociales implementadas. Sin embargo, gran parte de la literatura sobre gasto advierte que no es el gasto per se sino la calidad del gasto lo que interesa y, en última instancia, lo que genera cambios positivos en las variables sociales o económicas que consideremos. Por ello, se agrega además como indicador de políticas sociales un indicador de educación, ya que el área de educación constituye una de las principales áreas de la política social. Este indicador de las

políticas educativas es el **porcentaje de jóvenes entre 15 y 24 años de edad que no estudia ni trabaja** (NINI). Se seleccionó este indicador, teniendo en cuenta que mientras mayor sea este porcentaje se espera que menor sea el alcance de las políticas sociales de una sociedad, y porque es de esperar que mientras mayor sea este porcentaje mayor sea también el delito, ya que como se mencionó en la revisión de literatura de delito (capítulo II), a menor nivel educativo y menor edad (adolescentes y jóvenes) se observa mayor delito.

Por último, el modelo incluye una **variable independiente dicotómica que indica si los países tuvieron gobiernos de izquierda o no** durante el período analizado, siendo 0 el valor para los países que no lo hicieron y 1 para los países que sí. Se incluye esta variable para poder testear la segunda hipótesis de estudio (H2) y determinar si el hecho de haber adherido a políticas de izquierda contribuyó a disminuir la tasa de homicidios en los países que tuvieron gobiernos de izquierda en el período estudiado.

Las variables de control seleccionadas para los modelos econométricos son el crecimiento económico (PBI per cápita), la desigualdad (índice de GINI) y el nivel de pobreza. Cabe destacar que no se incluyó como variable de control a la tasa de desempleo porque está altamente correlacionada con la variable NINI.

Los datos de la tasa de homicidio provienen de la oficina de Drogas y Crímenes de Naciones Unidas (UNODC), el gasto social per cápita en dólares constantes de 2010 y PBI per cápita a dólares constantes de 2010 provienen de CEPAL, al igual que el indicador NINI, mientras que los datos de desigualdad (GINI) provienen del Banco Mundial.

En concreto, para testear las hipótesis planteadas se presenta información descriptiva de las tendencias de las tasas de homicidio cada 100,000 habitantes, del gasto social per cápita y del porcentaje de jóvenes entre 15 y 24 años que no estudia ni trabaja (NINI)⁵, en los países de la región en el período analizado. Asimismo, se realizan gráficos de dispersión entre las

⁵ Recordemos que la variable NINI es tomada como indicador de la performance del gobierno en el área de educación, que constituye una de las áreas claves de las políticas sociales.

variables tasa de homicidio cada 100,000 habitantes y gasto social per cápita, y tasa de homicidio y NINI, a la vez que se calcula el coeficiente de correlación de Pearson entre dichas variables.

A través de esta información se ofrece una primera aproximación a la relación entre las variables de estudio. En efecto, a partir de este análisis podemos corroborar que existe la correlación esperada entre dichas variables; y vemos como a medida que aumenta el gasto social per cápita disminuye la tasa de homicidios, a la vez que a medida que aumenta el porcentaje de NINI aumenta la tasa de homicidios.

Seguidamente se presentan los resultados del modelo econométrico de datos de panel. Esta herramienta nos permite realizar estimaciones entre datos que contienen una dimensión temporal y otra transversal, es decir, establece relaciones entre datos que ocurren a lo largo del tiempo (series temporales) y datos de distintos fenómenos en una misma unidad de tiempo (serie por países). Este análisis nos permitirá demostrar que no solo existe la correlación esperada entre las variables sino que se trata de una relación causal.

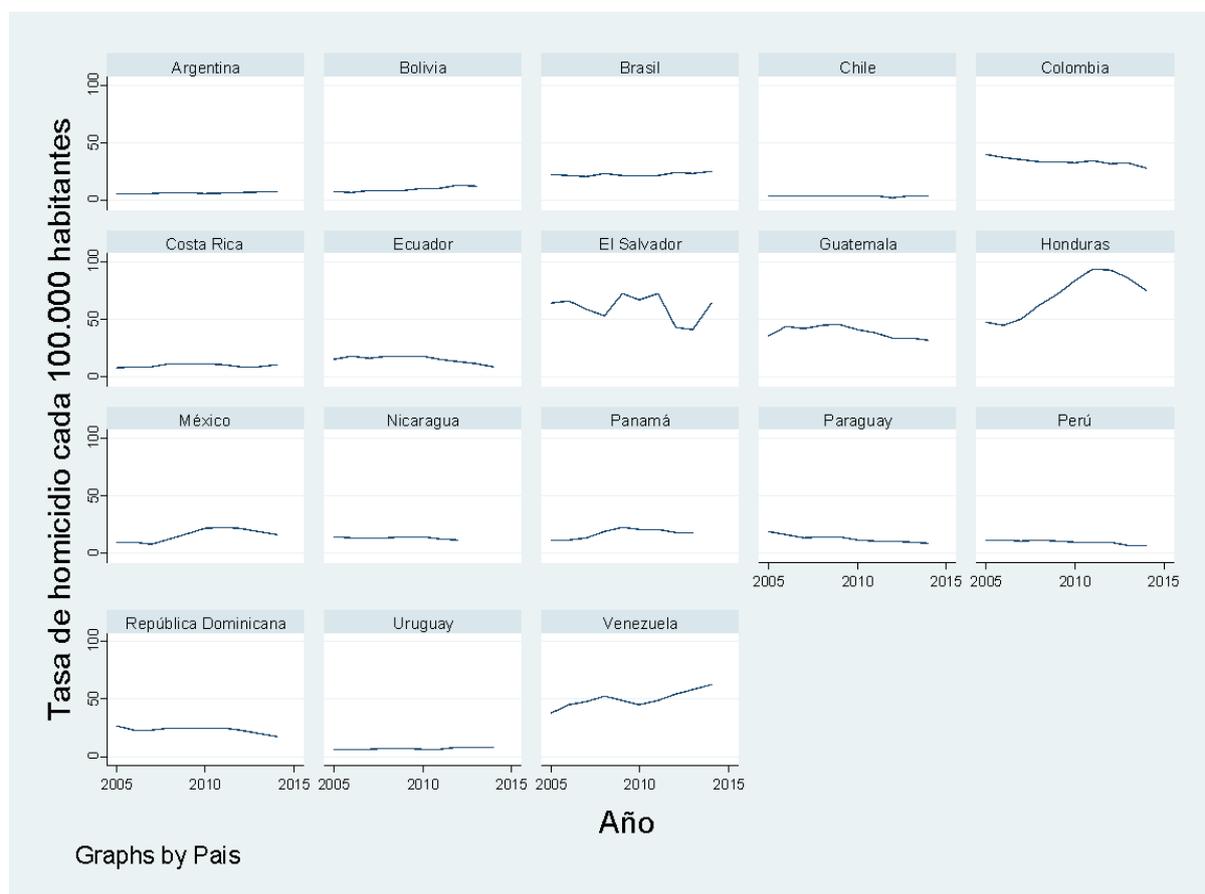
En el siguiente capítulo se presentan los resultados de estadística descriptiva e inferencial, y se profundiza en su análisis para responder a la pregunta de investigación planteada y a las hipótesis de estudio.

VI. Resultados estadísticos

Estadística descriptiva

En el siguiente apartado se presentan descriptivamente los comportamientos de las variables de estudio. Al analizar estos gráficos cabe recordar que el análisis que se plantea en este estudio propone una comparación entre países, entre aquellos que tuvieron gobiernos de izquierda y aquellos que tuvieron gobiernos de centro o derecha en el período estudiado.

Gráfico 6. Tasas de homicidio de los países de América Latina. 2005-2014.



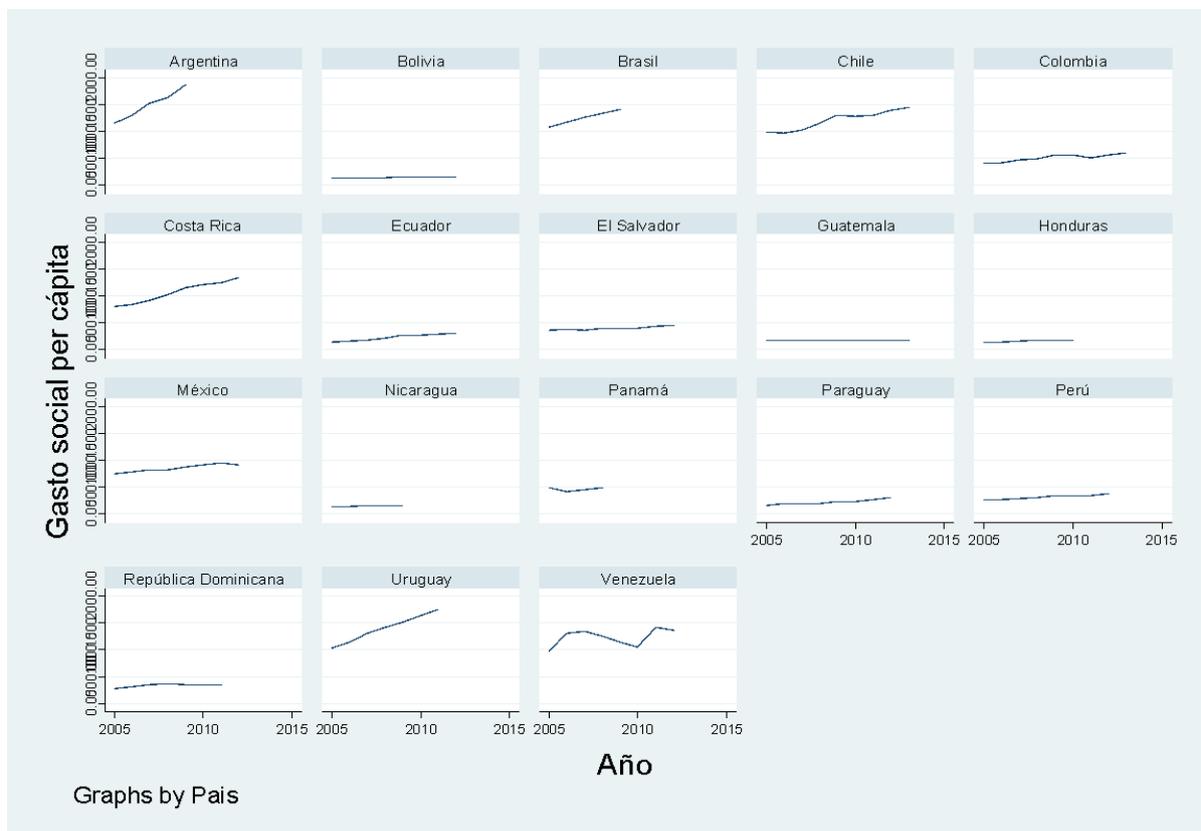
Fuente: elaboración propia en base a datos de UNODC

En el gráfico 6 se muestran las tendencias de la tasa de homicidio en los países de América Latina en el período 2005- 2014. La primera observación que surge de este gráfico es que, a excepción de Venezuela, los países que tuvieron gobiernos de izquierda (Argentina, Bolivia, Brasil Chile, Ecuador, Nicaragua, Uruguay) tuvieron también menores tasas de homicidio durante el período estudiado.

Los países en donde más aumentó la tasa de homicidios fueron Venezuela, Honduras y México. Por su parte, Panamá, Bolivia y Brasil tuvieron aumentos más moderados. Chile, Uruguay, Argentina y Nicaragua prácticamente se mantuvieron con las mismas tasas de homicidios durante el período. Por último, Colombia, Guatemala, Paraguay, República Dominicana y Ecuador y Perú disminuyeron sus tasas de homicidios. El Salvador es un caso atípico en el que la tasa de homicidios experimentó grandes variaciones interanuales en el período de estudio, pero mantuvo prácticamente intacto sus valores en el primer y último año considerado.

Se observa que la tasa de homicidios en la región es muy diversa y oscila entre 70.41 en Honduras a 3.43 en Chile. Siguiendo a Honduras, los países con mayores tasas de homicidio son El Salvador (59.98), Venezuela (48.82) y Guatemala (38.71), mientras que los países con menores tasas de homicidio, siguiendo a Chile son Argentina (5.80) y Uruguay (6.62). Otros países con altas tasas de homicidio son Colombia (33.66), República Dominicana (23.22) y Brasil (22.22).

Gráfico 7. Gasto público social per cápita (USD) de los países de América Latina. 2005-2014.



Fuente: elaboración propia en base a datos de CEPAL

La primera observación que surge del gráfico 7 es que durante el período 2005-2014 todos los países de la región aumentaron o mantuvieron su gasto público social.

Asimismo, se observa que los países con mayor gasto social per cápita (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Uruguay y Venezuela) tuvieron gobiernos de izquierda durante el período estudiado, a excepción de Costa Rica.

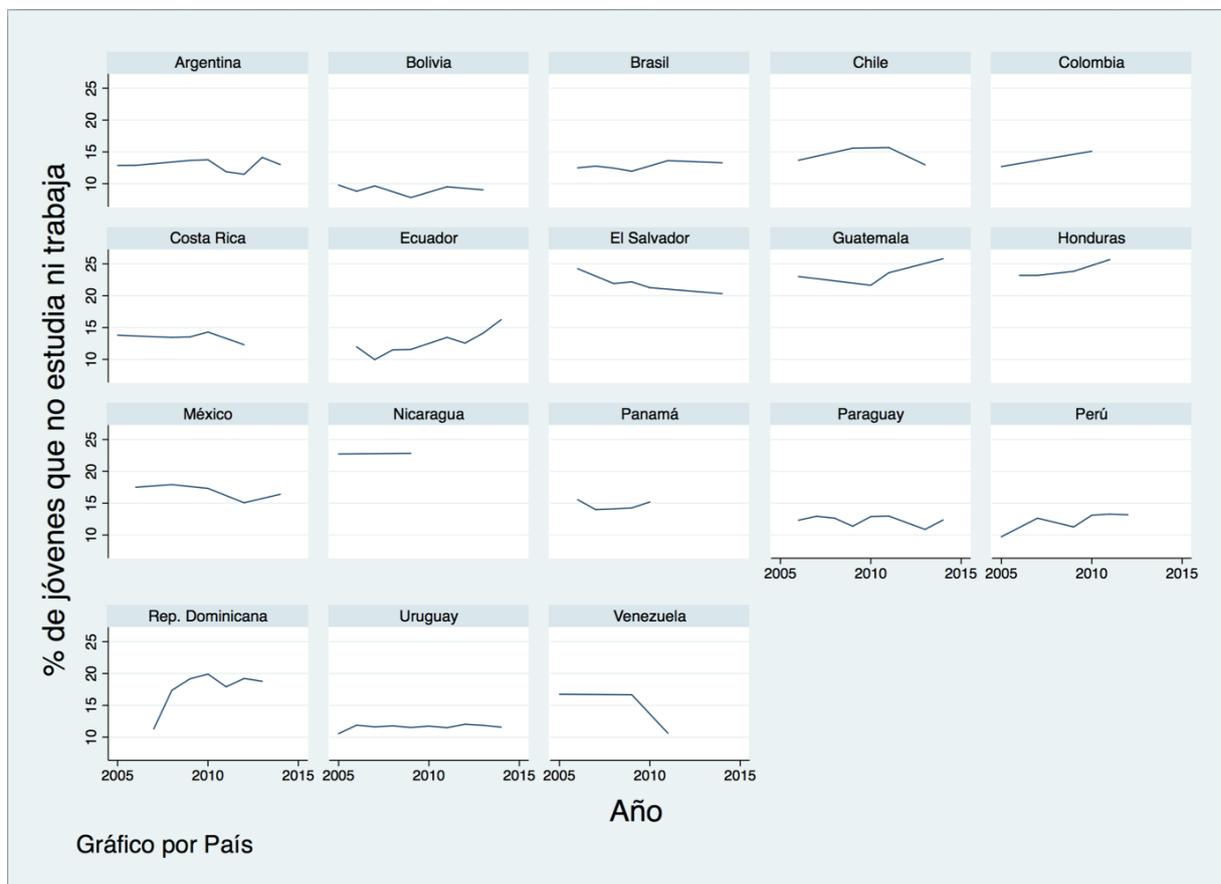
Los países con mayor variación positiva en su gasto público social per cápita son Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Costa Rica y Venezuela, mientras que los países con variación positiva prácticamente nula son Bolivia, Nicaragua, Panamá y Guatemala. Por

último, entre los países con menor variación positiva se encuentran Colombia, Honduras, Panamá y República Dominicana.

A partir de estas observaciones se puede decir que si bien los países que tuvieron mayor aumento en su gasto social son países que adoptaron gobiernos de izquierda durante el período (a excepción de Costa Rica), Bolivia y Nicaragua mantuvieron prácticamente intacto su gasto social.

Los países con gasto social per cápita más alto durante el período analizado fueron Argentina (USD 1,490.34), Uruguay (USD 1398.81), Brasil (USD 1,239.95), Venezuela (USD 1,224.49), Chile (USD 1,194.45) y Costa Rica (1,064.28), mientras que los países con menor gasto social per cápita son Bolivia (USD 135.94), Nicaragua (USD 144.13), Honduras (USD 162.54) y Guatemala (USD 172.38).

Gráfico 8. Porcentaje de Jóvenes de entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan los países de América Latina. 2005-2014.

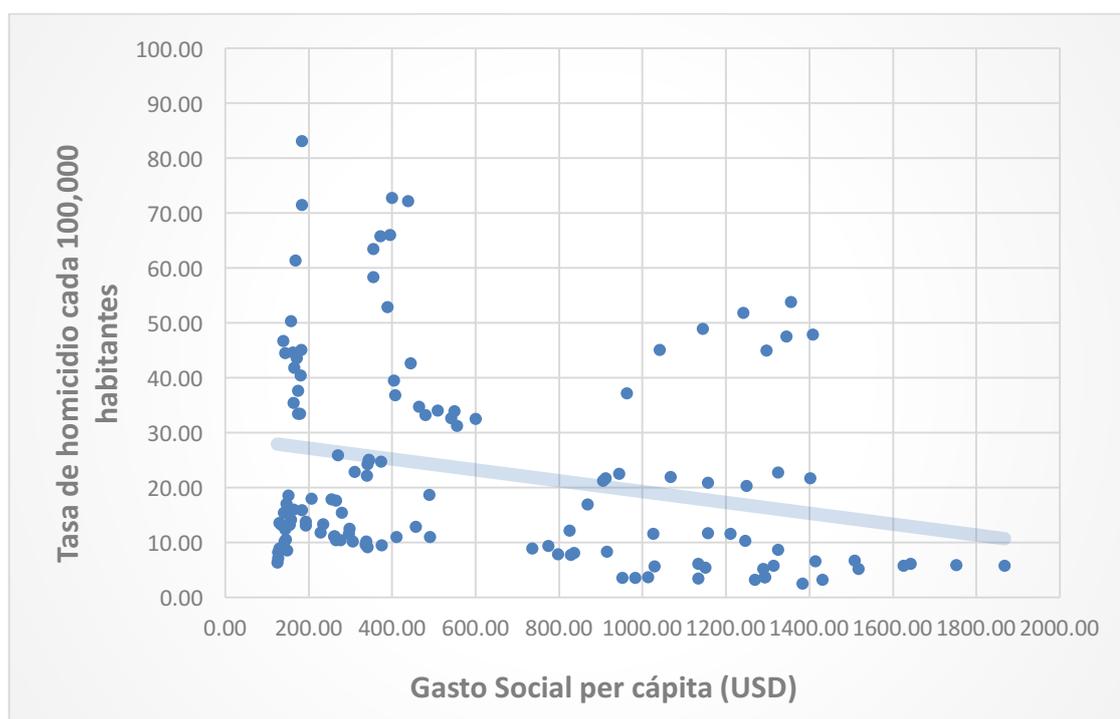


Al analizar la tendencia de la variable NINI observamos que no hay diferencia clara entre los países que tuvieron gobiernos de izquierda en el período estudiado y los que no, a diferencia de lo que sucede con variables analizadas anteriormente (tasa de homicidio y gasto per cápita).

En efecto, los países en los que este porcentaje es más alto pertenecen a Centro América (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua), y en todos los casos el porcentaje de NINI supera el 20%. Los países en los que el porcentaje de NINI es menor son Bolivia, Uruguay y Paraguay, con un promedio de 9.11%, 11.61% y 12.30% respectivamente, en el período estudiado.

A continuación se presentan gráficos de dispersión junto a los coeficientes de correlación, que reflejan la relación entre la tasa de homicidio y los indicadores de políticas sociales seleccionados (gasto social per cápita y NINI).

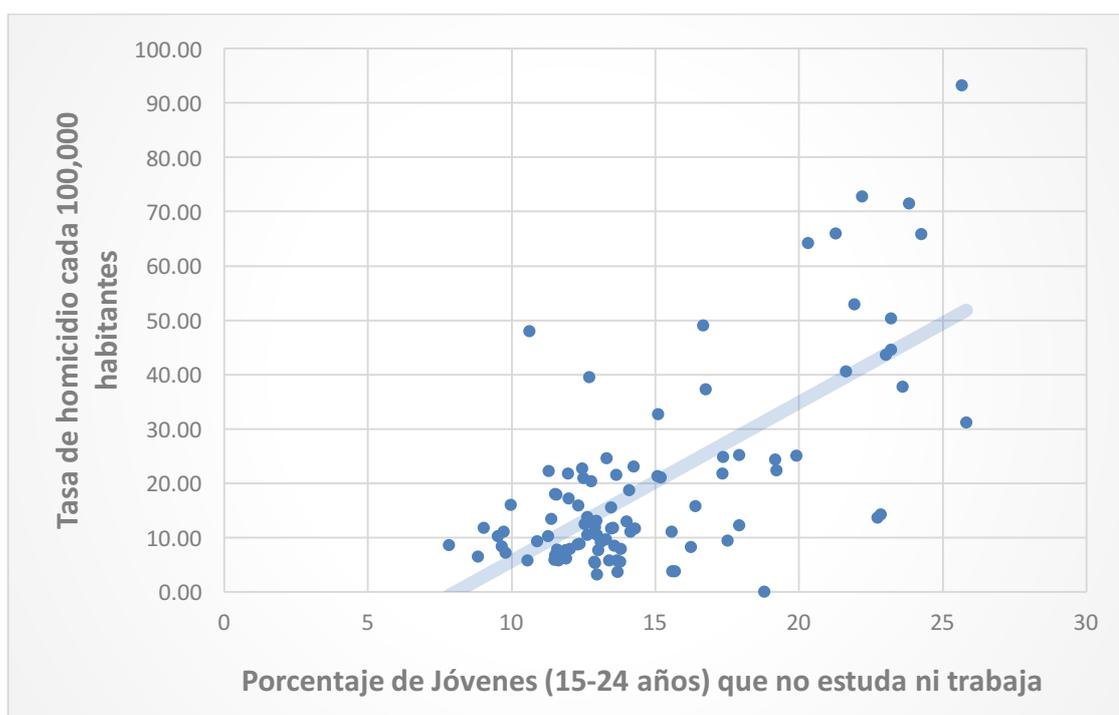
Gráfico 9. Dispersión entre la tasa de homicidios cada 100,000 habitantes y el Gasto Social per cápita (USD) – América Latina 2005-2014.



El Gráfico 9 presenta una relación lineal negativa entre la tasa de homicidios y el gasto social per cápita en los países de América Latina en el período 2005-2014, lo que quiere decir que a medida que aumenta el gasto social per cápita, disminuye la tasa de homicidios. El coeficiente de correlación que ilustra esta relación es -0.25^6 .

⁶ Recordemos que el Coeficiente de Correlación de Pearson es un valor que va de -1 a 1 y mientras más cercano este valor a -1 mayor es la correlación negativa y mientras más cercano a 1 mayor la correlación positiva. Si este valor es cercano a 0 indica que no hay correlación entre las variables.

Gráfico 10. Dispersión entre la tasa de homicidios cada 100,000 habitantes y el NINI – América Latina 2005-2014.



El Gráfico 10 presenta una relación lineal positiva entre la tasa de homicidios y el porcentaje de jóvenes “NINI” en los países de América Latina en el período 2005-2014, lo que indica que a medida que aumenta el porcentaje de jóvenes “NINI”, aumenta también la tasa de homicidios. El coeficiente de correlación de este gráfico es 0.71.

Estadística inferencial

Con el propósito de testear las hipótesis planteadas se llevó a cabo un modelo de regresiones múltiples de datos de panel. El modelo busca determinar el efecto de las políticas sociales sobre la tasa de homicidios; y el efecto de los gobiernos de izquierda sobre el

delito, bajo la creencia de que las políticas sociales y los gobiernos de izquierda contribuyen a disminuir el delito.

En el modelo se incorporan las variable independientes (gasto social per cápita, NINI y dummy izquierda-derecha⁷) junto a variables socioeconómicas de control (PBI per cápita y desigualdad). Cabe destacar que se tuvo especial cuidado en la selección de estas variables, ya que las variables socioeconómicas que la literatura reconoce como relevantes tienden a estar correlacionadas entre sí, y a acarrear problemas de colinealidad. Más aún, se priorizó la parsimonia del modelo al seleccionar pocas variables con fundamento teórico y que sean independientes entre sí.

A continuación se presentan los resultados del modelo, prestando especial atención a la significatividad estadística de los efectos de las variables al momento de realizar afirmaciones empíricas.

Tabla 1. Efecto de las políticas sociales sobre la tasa de homicidios los países de América Latina. 2005-2014, random effects.

⁷ Es decir, la variable dicotómica utilizada para representar si los países tuvieron gobiernos de izquierda o no durante el período estudiado.

Tasa de homicidio	Modelo 1
Gasto social per cápita	0.0099885 (-0.0061136)
NINI	0.75688** (-0.3613578)
Dummy Izquierda	-10.60751 ** (-5.306147)
PBI	-0.0024632 ** (-0.0011218)
GINI	-0.0533623 (-0.2428569)
Cons.	26.12293 (-16.35237)
R2	0,39
N	72

Error estándar entre paréntesis.

** Significativo al 95% de confiabilidad

Fuente: elaboración propia

A partir del Modelo 1 se confirman parcialmente las dos hipótesis del presente trabajo de investigación, ya que la variable NINI utilizada para medir el efecto de las políticas sociales educativas y la variable dummy de países de izquierda- derecha tienen el efecto esperado y cuentan con significatividad estadística, mientras que la variable Gasto Social per cápita tiene el efecto contrario al esperado, aunque sin significatividad estadística. En concreto, se encuentra que las políticas sociales tienen un efecto positivo en la reducción de las tasas de homicidio; y que los países que contaron con gobiernos de izquierda durante el período estudiado lograron reducir más su tasa de homicidios que los países que no adhirieron al “giro a la izquierda”. Asimismo, se confirma la teoría presentada en la revisión de la literatura que postula que el crecimiento económico contribuye a disminuir el delito.

En el Modelo se encuentra que el Gasto Social tiene el efecto contrario al esperado, ya que el aumento en 1 USD per cápita en el gasto social aumenta 0,01 la tasa de homicidio cada 100.000 habitantes. Sin embargo, este resultado no es estadísticamente significativo, por lo que debe ser tomado con precaución. Para corroborar este efecto, se podría ampliar la muestra.

Asimismo, la variable NINI utilizada como indicador de políticas sociales de educación tiene el efecto esperado sobre la tasa de homicidios, y este hallazgo es estadísticamente significativo. Particularmente, el aumento en 1% de los jóvenes y adolescentes de 15 a 24 años de edad que no estudian ni trabajan (NINI) genera un aumento de 0,76 en la tasas de homicidios.

Por su parte, la variable Dummy Izquierda⁸ muestra que los países de adoptaron gobiernos de izquierda durante el período estudiado redujeron -10.61 la tasa de homicidios respecto a los que no lo hicieron.

Por último, analicemos el comportamiento de las variables de control incluidas en el modelo. El crecimiento económico tiene un efecto negativo muy pequeño aunque significativo sobre la tasa de homicidios: el aumento en una unidad en el PBI per cápita disminuye la tasa de homicidios en -0.002, y este hallazgo cuenta con significatividad estadística del 95%. Por otro lado, el aumento en una unidad en el índice de desigualdad de GINI paradójicamente disminuye en -0.05 la tasa de homicidios. Sin embargo, este coeficiente no tiene significatividad estadística por lo que debe ser considerado con cuidado.

Cabe destacar que en el Modelo 1 el R2 es de 0,39 lo que significa que las variables incluidas en el modelo explican el 39% de la variación en la tasa de homicidios.

⁸ Recordemos que esta variable adopta el valor 1 si los países contaron con gobiernos de izquierda durante el período estudiado, y adopta el valor 0 en caso contrario.

VII. Conclusiones

En el presente trabajo de investigación se realizaron análisis de correlación entre variables y un modelo econométrico de datos de panel con el fin de testear las hipótesis planteadas. En particular, la primera hipótesis propuesta presentaba la expectativa teórica de que las políticas sociales disminuyan las tasas de homicidio puesto que ellas apuntan a mejorar las principales áreas del bienestar humano: educación, salud, previsión social y consumo -a través de transferencias monetaria- y a proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad frente a la vicisitudes del mercado económico. Como consecuencia, se esperaba que las políticas sociales disminuyan al menos el delito “por necesidad” y los homicidios asociados a él, tales como homicidios en circunstancia de robos.

El modelo nos permite corroborar parcialmente la H1 planteada, ya que si bien el gasto social no tiene el efecto esperado sobre la tasa de homicidios, puesto que el aumento en el gasto social aumenta mínimamente la tasa de homicidios, este resultado no es estadísticamente significativo y no puede ser considerado como tal. Por su parte, el indicador de políticas sociales educativas NINI tiene el efecto esperado, ya que a medida que aumenta este porcentaje aumenta la tasa de homicidios, y este hallazgo es significativo estadísticamente.

Por otro lado, podemos confirmar la H2, ya que el efecto de la variable dummy izquierda nos muestra que los países que tuvieron gobiernos de izquierda durante el período estudiado tuvieron menores tasas de homicidio que los países que contaron con gobiernos de izquierda. Este hallazgo también es estadísticamente significativo.

Los principales hallazgos de esta tesis pueden resumirse del siguiente modo:

Primero, mejorar la educación es clave en el combate contra el delito. Entre los académicos, funcionarios y ciudadanos en general pareciera estar extendida la noción de que mejorar la educación es necesario para casi cualquier progreso económico y social que se

quiera alcanzar. Más aún, es sabido que la educación es indispensable en la formación de cualquier sociedad civilizada, y que el proceso educativo tuvo un rol decisivo en la construcción de los estados modernos. En el presente trabajo de investigación se encuentra evidencia empírica respecto a la importancia de la educación en la reducción de la tasa de homicidios, y al hecho de que los jóvenes sigan yendo a la escuela, y luego se inserten en el mercado laboral, los mantiene alejados del delito.

Segundo, los gobiernos de izquierda de América Latina en la década del dos mil que tuvieron como objetivo central disminuir la desigualdad y la pobreza, y proteger a los sectores desfavorecidos en las década del noventa, tuvieron menores tasas de homicidio que los países que no adoptaron estas políticas.

Tercero, el crecimiento económico reduce la tasa de homicidios, por lo que el delito es también un área que se ve beneficiada del crecimiento económico de la sociedad.

Cuarto, para reducir el delito es necesario que el Estado intervenga para minar los resultados adversos que genera la dinámica del mercado competitivo. Si bien claro está que el crecimiento económico es bueno para cualquier país, el Estado no puede confiar en las teorías económicas del *derrame*, que esperan que toda la sociedad se beneficie de la bonanza económica. En efecto, este estudio aporta evidencia empírica respecto a los efectos positivos de la intervención estatal en materia de políticas sociales, y se observa que la protección contra el mercado es también protección contra el delito.

Por último, con el fin de aumentar la evidencia empírica respecto al efecto de las políticas sociales en el delito, se podría considerar el efecto de indicadores de los otros sectores que alcanzan las políticas sociales: salud, previsión social y transferencias monetarias.

VIII. Referencias bibliográficas

Aaltonen, M., Kivivuori, J., & Martikainen, P. (2011). Social Determinants of Crime in a Welfare State: Do they still Matter? *Acta Sociologica*, 54(2), 161-181.

Bailey, W. C. (1984). Poverty, Inequality, and City Homicide Rates. *Criminology*, 22(4), 531-550.

Blumstein, Alfred, and Richard Rosenfeldm (1998) "Trends in Rates of Violence in the USA." *Studies on Crime and Crime Prevention* 8:139-67

Browning, C. R., Leventhal, T., & Brooks-Gunn, J. (2004). Neighborhood context and racial differences in early adolescent sexual activity. *Demography*, 41(4), 697-720.

Cafferata, Fernando (2010): Los costos fiscales del delito: Argentina y México en perspectiva comparada. Tesis de Maestría en Administración y Políticas Públicas. Universidad de San Andrés.

Camara, M., & Salama, P. (2004). Homicidios en América del Sur: ¿los pobres son peligrosos? *Revista de Economía Institucional*, 6(10), 159-181.

Carrión Pérez, E. (2002). Validación de características al ingreso como predictores del rendimiento académico en la carrera de medicina. *Educación Médica Superior*, 16(1), 1-2.
CELIV (2015): "Condiciones de vida en la cárcel: Resultados de la encuesta de detenidos condenados". Universidad Nacional de Tres de Febrero.

CELIV (2014) "Condiciones de socialización, entorno y trayectoria asociados a la reincidencia en el delito" Una aproximación explicativa utilizando un modelo multivariado de análisis", Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Cohen, S. (1985). *Visions of Social Control: Crime Punishment and Classification* (pp. 127-143). Cambridge: Polity Press.

Cole, J. H., & Gramajo, A. M. (2009). Homicide rates in a cross-section of countries: Evidence and interpretations. *Population and Development Review*, 749-776.

Di Tella, R., & Schargrodsy, E. (2009). Happiness, Ideology and Crime in Argentine Cities.

Di Tella, R., & Schargrodsy, E. (2009). Happiness, ideology and crime in Argentine cities.

Di Tella, R., S. Galiani y E. Schargrodsy. 2010. Crime Distribution and Victim Behavior during a Crime Wave. En *The Economics of Crime: Lessons for and from Latin America*, editado por R. Di Tella, S. Edwards, y E. Schargrodsy. Chicago: National Bureau of Economic Research y University of Chicago Press.

Duggan, L. (2012). *The twilight of equality? Neoliberalism, cultural politics, and the attack on democracy*. Beacon Press.

Johnson, E. A., & Monkkonen, E. H. (Eds.). (1996). *The civilization of crime: Violence in town and country since the Middle Ages*. University of Illinois Press.

LaFree, G. (2005). Evidence for elite convergence in cross-national homicide victimization trends, 1956 to 2000. *The Sociological Quarterly*, 46(1), 191-211.

Land, K. C., McCall, P. L., & Cohen, L. E. (1990). Structural covariates of homicide rates: Are there any invariances across time and social space? *American journal of sociology*, 922-963.

Levitzky, Steven y Roberts, Kenneth (eds.). 2011. *The Resurgence of the Latin American Left*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. Introducción y conclusiones.

Martínez, R. & Collinao, M. P. (2010). *Gasto social: modelo de medición y análisis para América Latina y el Caribe*. CEPAL.

Mesquita Neto, Paulo (2003): *Paths Towards Democratic Policing in Latin America*

Messner, S. F. (1982). Poverty, Inequality and the Urban Homicide Rate: Some Unexpected Findings. *Criminology*, 20(1), 103-114.

Messner, S. F., Rosenfeld, R., & Baumer, E. P. (2004). Dimensions of Social Capital and Rates of Criminal Homicide. *American Sociological Review*, 69(6), 882-903.

PNUD (2015) *Informe sobre Desarrollo Humano, Trabajo al Servicio del Desarrollo Humano*.

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2013. *Informe Regional de Desarrollo Humano 2013–2014 Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina*. Nueva York: PNUD.

Portes, A., & Roberts, B. (2005). *Introducción. La ciudad bajo el libre mercado*. Alejandro Portes, Bryan Roberts y Alejandro Grimson (edits.), *Ciudades latinoamericanas. Un análisis comparativo en el umbral del nuevo siglo*, Prometeo Libros, Buenos Aires.

Queirolo, R. (2013). *The Success of the Left in Latin America*.

Repetto, F. (2001). *Gestión pública y desarrollo social en los noventa: Las trayectorias de Argentina y Chile*. Prometeo Libros.

Savolainen, K. (2000). Inequality, Welfare State, and Homicide: Further support for the institutional anomie theory. *Criminology*, 38(4), 1021-1042.

UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). 2015. Report of the United Nations Office on Drugs and Crime on the International Classification of Crime for Statistical Purposes. Nueva York: UNODC. Disponible en <http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc15/2015-7-CrimeStats-Classification-E.pdf> (visitada el 20 de Mayo, 2015).

Wormald, G., Sabatini, F., Dammert, L., Salinas, V., & Contreras, Y. (2003). El impacto del nuevo modelo de orientación neoliberal sobre las oportunidades de integración social del ámbito urbano: Chile 1980-2000.